

mujeres y las familias. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23.179), que ha adquirido jerarquía de norma constitucional con su aprobación por la Convención Constituyente, establece en su artículo 10, inciso h), el acceso a la información que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y asesoramiento sobre planificación de la familia. Dicho concepto se amplía en el artículo 12, inciso 1, que requiere que se asegure a la mujer el acceso a los servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia; y por último, el artículo 16, inciso a) que establece la igualdad de la mujer con el hombre en cuanto a los derechos reproductivos, de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que permitan ejercer estos derechos.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo 1994) los representantes de todos los gobiernos aprobaron como objetivos a impulsar, la protección de la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo, a fin de lograr la reducción de la morbilidad y muertes maternas, principalmente aquellas causadas por abortos realizados en malas condiciones (punto 8.25 del Programa de Acción sobre Población y Desarrollo).

La Plataforma de Acción de Beijing de 1995, firmada por nuestro país, se pronuncia en igual sentido.

Sociedades científicas, profesionales con amplia trayectoria en el ámbito hospitalario, así como asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y las familias, coinciden en sostener que la mejor manera de prevenir eficazmente el aborto es mediante la implementación de programas de procreación responsable que tiendan a disminuir significativamente los embarazos no planificados.

Es por ello que la presente ley establece:

a) La implementación de programas de procreación responsable para que todos los habitantes puedan ejercer de manera libre, igualitaria, responsable e informada sus derechos reproductivos;

b) Que todos los establecimientos médico-asistenciales del sector público, de la seguridad social y las entidades privadas deben brindar información sobre los métodos anticonceptivos disponibles; realizar controles de salud y estudios previos y posteriores; prescribir, colocar y/o suministrar los métodos; brindar información y asesoramiento sobre enfermedades de transmisión sexual, especialmente el sida; en forma gratuita para la población sin cobertura de salud y/o indigente;

c) La capacitación permanente con abordaje interdisciplinario, de los agentes involucrados en las prestaciones;

d) La prescripción de métodos anticonceptivos de carácter transitorio y reversible elegidos voluntariamente por el beneficiario;

e) La prohibición de utilizar métodos con efectos irreversibles sin indicación terapéutica y consentimiento escrito;

f) La inclusión de estas prestaciones en el Nomenclador Nacional de Prácticas Médicas y en el Nomenclador Farmacológico de las Obras Sociales;

g) El Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, como autoridad de aplicación, deberá suscribir convenios con las provincias para establecer programas provinciales de procreación responsable.

Por último, hay que reconocer que el establecimiento de políticas públicas que faciliten el acceso a la población a la protección de su salud en lo referente a la reproducción, y a una procreación voluntaria y responsable, constituye a esta altura del siglo XX una necesidad indiscutible y una deuda que requiere urgentemente ser repamada. Este es el objetivo de la presente ley y por eso les pido a mis pares la aprobación del mismo.

Graciela Fernández Meijide. — Carlos A. Alvarez.

—A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familia, Mujer y Minoridad, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.

49

#### Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, informe sobre las siguientes cuestiones:

1º—Cuál es el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, mediante el cual se realiza la asignación de cápitales para la cobertura médica de los afiliados al Instituto residentes en el conurbano bonaerense.

2º—Si es cierto que el criterio de los organismos intermediarios ha privilegiado a sanatorios y clínicas que no cuentan con la infraestructura necesaria para brindar servicios de salud a los afiliados, en desmedro de instituciones hospitalarias de larga trayectoria en su vinculación con el Instituto.

3º—Si es cierto que gran número de afiliados de la zona sur del Gran Buenos Aires se ven obligados a atenderse en sanatorios o clínicas asignados por el Instituto, ajenos al distrito de residencia del afiliado.

4º—Si es cierto que la distribución de cápitales de la zona sur del Gran Buenos Aires privilegia instituciones sanitarias que no contarían con el correspondiente aval del Ministerio de Salud provincial para su funcionamiento.

5º—Cuál es el promedio de cápitales que se ha asignado a los distintos centros hospitalarios existentes en la zona sur del Gran Buenos Aires, brindando un detalle

pormenorizado de los mismos y los criterios y antecedentes tomados en cuenta.

6º—Si a la fecha existe en poder del Instituto contrato o precontrato con las distintas unidades hospitalarias del Gran Buenos Aires, que establezca los criterios de asignación de cápitales en cada uno de los casos. En caso afirmativo, deberá remitir copia de los mismos a esta Cámara.

Carlos A. Raimundi. — Alfredo H. Villalba.  
— María A. González.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto la presencia de diversas denuncias efectuadas por prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) del sur del Gran Buenos Aires, sobre el criterio poco claro y discriminatorio para la distribución de cápitales hospitalarios en dicha zona.

La mayoría de las clínicas y sanatorios perjudicados por esta política del Instituto, se encuentra virtualmente al borde del cierre, con el consiguiente impacto desde el punto de vista de la salud de la población y las respectivas fuentes de trabajo (100 trabajadores promedio c/u).

A centros asistenciales que contaron históricamente con una asignación de entre 10.000 a 25.000 cápitales, se les ha asignado una cifra que en todos los casos no supera los 3.000.

En la distribución de los beneficiarios se privilegia a aquellos sanatorios y clínicas que ostentan algún tipo de vinculación con el directorio del Instituto, sin importar su capacidad operativa, sus antecedentes desde el punto de vista médico, ni su ubicación geográfica.

Asimismo, los beneficiarios del Instituto que viven en Quilmes, por ejemplo, son asignados para su atención en clínicas o sanatorios de Florencio Varela o Claypole. Y se señala, paradójicamente, el caso de una institución que con una capacidad de 20 camas ha sido beneficiada con una asignación de 8.000 cápitales.

Dicho establecimiento no cuenta con las condiciones mínimas, en cuanto a operatividad para ser habilitado por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

A todas estas circunstancias se suma la total inseguridad jurídica de las referidas asignaciones, toda vez que las mismas no responderían en la actualidad a condiciones de contratación (contratos o precontratos) aprobadas por el directorio del Instituto.

Por las razones expuestas, propiciamos se dé curso al presente proyecto.

Carlos A. Raimundi. — Alfredo H. Villalba.  
— María A. González.

—A las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Tercera Edad.

0051-D-98

50

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

#### PROYECTO DE REFORMA AL TÍTULO III DEL CÓDIGO PENAL DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTANGIBILIDAD SEXUALES

Artículo 1º—Sustitúyase el título III del Código Penal (delitos contra la honestidad), el que quedará redactado en los siguientes términos: "Delitos contra la Libertad e Intangibilidad Sexuales".

Art. 2º—Sustitúyanse los artículos 119, 120, 121, 122 y 123, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

#### CAPÍTULO I

##### Violación y abuso deshonesto

##### Violación

Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 8 años todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza cometido contra otra persona por fuerza o intimidación.

Artículo 120: Se impondrá la misma pena:

1. Cuando la víctima fuere menor de 12 años aunque medie su consentimiento.
2. Si se realizare contra una persona que padece retardo mental evidente o esté privada de discernimiento en forma permanente o transitoria.
3. Cuando el sujeto activo sea el o la cónyuge o conviviente de la víctima.

Artículo 121: Violación agravada. La reclusión o prisión será de 6 a 15 años en los siguientes casos:

1. Cuando resultare un grave daño en la salud de la víctima.
2. Cuando el hecho fuere cometido por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, o hermano, tutor o encargado de su guarda.
3. Cuando existiere entre el autor del delito y la víctima relación de autoridad, confianza o dependencia.
4. Cuando la violación fuere cometida con el concurso de dos o más personas.
5. Cuando sea utilizada como método de tortura.
6. Cuando el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad y el orden.

Artículo 122: Abuso deshonesto. Se impondrá prisión de 1 a 3 años al que abusare de persona de uno y otro sexo, o concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya

penetración. Si el autor del hecho fuera alguna persona de las mencionadas en el artículo 122 inciso 2 y 6, se impondrá reclusión o prisión de 2 a 6 años.

Artículo 123: *Acoso sexual*. Será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 meses a 2 años y destitución de su cargo la persona que con relación patronal, académica o escolar, o por motivos sociales o culturales, abuso de poder o privilegio sobre otra, acosare sexualmente a sus subordinados o dependientes, la pena establecida en el párrafo anterior se agravará entre un tercio del mínimo y la mitad del máximo en los casos en que ocurran los supuestos previstos en el artículo 120.

Art. 3º.—Sustitúyanse los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 los que quedarán redactados de la siguiente forma:

## CAPÍTULO II

Artículo 125: *Prostitución de menores de edad*. El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución de menores de 14 años, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado con reclusión o prisión de 3 a 7 años.

Cualquiera fuera la edad de la víctima la pena será de reclusión o prisión de 4 a 10 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda o que hiere con ella vida marital.

Artículo 126: *Rufianismo*. Será reprimido con prisión de 2 a 5 años el que sometiendo contra su voluntad a una persona prostituida a indebidas relaciones de dependencia personal o económica, viviera total o parcialmente de los ingresos obtenidos por ésta.

Artículo 127: Será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de un menor de edad para que ejerza la prostitución.

Artículo 128: Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes reales o virtuales obscenas, y el que expusiere, distribuyere o las hiciera circular, cuando se haya utilizado a un menor de edad para la producción de las mismas.

Artículo 129: La condena por los delitos previstos en este título implica privación de la patria potestad o interdicción perpetua de la tutela o curatela cuando la calidad de padre, tutor o curador sea elemento constitutivo o circunstancia agravante.

Art. 4º.—Sustitúyase el capítulo "Disposiciones comunes a los capítulos anteriores" por el siguiente:

## Capítulo III

Artículo 129: Los delitos de este título son acciones dependientes de instancia privada. La prensa no podrá dar a publicidad de la identidad de la víctima, a no ser que la misma haya dado su expresa autorización por escrito.

Se procederá de oficio:

- Si el hecho fuere cometido por el padre o tutor o por un funcionario público o encargado de algún servicio público;
- Si el delito estuviere anexo a otro por el que se debe proceder de oficio.

Art. 5º.—Deróganse los artículos 131, 132 y 133 del Código Penal.

Art. 6º.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Meijide. — Federico T. M. Storani. — Rodolfo Rodil. — Carlos A. Alvarez. — Carlos A. Raimundi. — Irma F. Parentella. — Nilda C. Garré. — Guillermo E. Estévez Boero.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley intenta adecuar nuestra normativa positiva al derecho internacional, poniendo especial énfasis en respetar el principio de igualdad entre los géneros, y en prevenir y sancionar los delitos que tienen como víctimas a los niños, niñas y adolescentes en la actualidad.

Para ello, se ha analizado numerosa legislación comparada, y se han tomado en cuenta la Convención Internacional contra la Discriminación de la Mujer y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ambas con rango constitucional (artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna), además de la doctrina y jurisprudencia de nuestro país referida al tema.

### Delitos contra la libertad e intangibilidad sexuales

La referencia en el epígrafe del código vigente a la "honestidad" viene siendo valorada negativamente por la doctrina desde hace tiempo. Existe modernamente la tendencia a expresar en la mayor parte de los epígrafes del código que recogen las diversas figuras delictivas el bien jurídico con ellas protegido, por ello se propone el título: "Delitos contra la libertad e intangibilidad sexuales". Así como lo han hecho modernas legislaciones, entre ellas el Código Penal alemán.

La palabra "honestidad" resalta, además, connotaciones de valor social incorporando al derecho positivo valoraciones que confunden derecho, con moral, entrometiéndose de esta manera en la esfera privada de las personas. El derecho penal debe limitarse a tutelar los actos que importen eventuales agresiones sexuales que la víctima puede sufrir, y no juzgar su modo de vida.

En el epígrafe se alude no sólo a la libertad sexual, sino también a la intangibilidad sexual.

Según esta idea formulada originariamente por la doctrina italiana y desarrollada por algunos autores españoles, en determinadas hipótesis de los delitos sexuales no puede afirmarse que se proteja la libertad sexual, en cuanto que, la víctima carece de esa libertad, o aún fácticamente la tuviera, se considera por el legislador irrelevante. Estimamos estos autores que la libertad sexual presupone, en cuanto "libertad valorativa" que es, la capacidad cognoscitiva y volitiva en el sujeto pasivo, capacidad referida al significado y trascendencia del acto sexual y del consentimiento que eventualmente pueda prestar a él. De ello deriva que, donde falte esa capacidad faltará también la libertad sexual, que por tanto, no podrá ser violada ni menoscabada.

En los delitos sexuales cometidos a personas privadas de razón o de sentido, falta, temporal y elegir entre ellas, así como la de actuar conforme a esa elección, por lo que no se puede atacar una libertad sexual inexistente de la víctima. El problema no se resuelve alegando que la ley presume en esas personas, y negar por otro lado, en los tipos citados cualquier consentimiento de víctima en relación al acto sexual en cuestión.

No se puede presumir la capacidad para oponerse y, por tanto, su capacidad de determinarse libremente. En suma, no se puede decir que hay capacidad para ser libre pero no hay para consentir.

A partir de este planteamiento surge la idea de "intangibilidad" sexual como bien jurídico protegido en estos preceptos. La ley considera sexualmente intocables a personas que poseen determinadas situaciones y las protege en consecuencia; sería el derecho de esas personas a estar exentas o libres de cualquier daño de orden sexual.

No se ha pretendido ampliar el concepto de intangibilidad sexual para concebir los tipos bajo el bien jurídico protegido, libertad sexual, abarcando connotaciones moralizadoras, sino que se trata de proteger a individuos que estando incapacitados para ejercer la libertad sexual por encontrarse en determinadas situaciones especiales, se hallan más desamparados que el resto de la comunidad.

### Violación y abuso deshonesto

Pensamos que proteger, menos la libertad sexual del hombre que la de la mujer viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley, y los pactos internacionales incorporados a nuestra Constitución que prohíben expresamente las discriminaciones por razón del sexo.

Desde una perspectiva de *lege ferenda* la mayoría de la doctrina es partidaria de ampliar las conductas de la misma gravedad, sea porque no existen, de ampliar las conductas sexuales de la violación para que incluyan; sin género de dudas, los coitos anales heterosexuales y homosexuales.

Se considera que estamos ante conductas de la misma gravedad, sea porque no existen diferencias radicales entre la naturaleza de un acceso u otro, sea porque la desaprobación social del coito anal es igual o mayor que la del vaginal.

Parece más conveniente que se destine un artículo a definir la figura central y en los demás se analicen las situaciones particulares. La concepción de la acción es más amplia que en el código actual, dado que permite incriminar como violación a todo tipo de penetración incluyendo casos como la *fellatio in ore*, y la utilización de otros instrumentos que no sean el órgano sexual masculino.

La ampliación indicada, tiene su fundamento en que los efectos psicológicos y físicos, emocionales y sexuales sobre la víctima son los mismos en estos casos que en los que mencionaba la figura tradicional. La víctima o el autor pueden ser, entonces, con el nuevo encuadramiento, de uno u otro sexo.

Se deroga el artículo 120 anterior al estupro por entender que en esa figura se prejuzga sobre la capacidad de discernimiento de los jóvenes. De hecho es bastante difícil determinar a qué edad se llega a una maduración física y psíquica adecuada para comenzar a tener relaciones sexuales.

La realidad nos demuestra que estas relaciones cada vez se dan más precozmente.

También se deroga la figura del acceso carnal fraudulento por entender que esta situación ya no se produce.

Se consagra legislativamente en el artículo 120 inciso 3), la violación dentro de la pareja, ya sea unida en matrimonio legal o concubinato.

Durante años se ha entendido que existen determinadas relaciones entre el sujeto activo y pasivo, por los cuales el primero puede exigir la prestación del débito conyugal. En estos casos no quedaba configurado el delito de violación.

La doctrina consideraba, que había violación si se daba una exigencia abusiva por el modo en que se pretendiese realizar el acceso carnal o por peligro que pudiese acarrear para la mujer.

Pero, en los últimos años, se ha registrado un avance en la jurisprudencia, y se ha llegado a la conclusión de que tratándose de prestaciones con intervención del propio cuerpo del sujeto y su voluntad, ninguna acción de cumplimiento, puede concretarse a través de la compulsión física.

La pareja que accede carnalmente a su pareja o procura el acceso mediante actos significativos de esa finalidad desplegando energía física a fin de superar el disenso por el acto se considera, está cometiendo el delito de violación.

### Acoso sexual

Se deroga el artículo actual y se reemplaza por la figura de acoso sexual en lugares de trabajo o estudio.

La figura penaliza cualquier forma de presión sexual no deseada que se da en el ámbito de trabajo, colegio, universidad, etcétera, y genera como consecuencia que la persona presionada se desempeñe en un ambiente hostil, se ve perjudicada en los ascensos laborales, profesionales o académicos, que se ve obligada a renunciar, etcétera.

Toda persona tiene derecho a la libertad de trabajo, la igualdad de trato, la dignidad y, atentar contra esos derechos es atentar contra derechos humanos elementales.

les. Por eso es importante sancionar este tipo de actitudes y conductas de manera tal de contribuir a una toma de conciencia sobre sus efectos nocivos.

#### Prostitución de menores de edad

La normativa vigente de los delitos relativos a la prostitución es deficiente ya que posee un desmesurado casuismo, que termina dando lugar a reiteraciones típicas, a tratamientos desiguales, a ininteligibilidad de algunos tipos y una falta de claridad y técnica legislativa, que repercute en la interpretación y en las exigencias de justicia material.

La doctrina tradicional sostiene que el bien jurídico protección es la moral sexual colectiva, como ya se dijo en el encabezado, se trata de proteger la libertad sexual individual y han de pensarse en la medida que supongan un atentado a esa libertad sexual de la persona prostituida, o a su ejercicio en determinadas condiciones de dependencia, sea porque determinan a una persona, que se estima no posee la capacidad de decisión en este ámbito a su ejercicio. Toda punición que sobrepase la protección de la libertad sexual individual incidirá indefectiblemente en la protección de contenidos moralizadores.

Tal actitud, por lo demás, fomenta las descripciones típicas vagas reiterativas y además injustas.

Nos parece objetable que existan en nuestro Código Penal tipos que penen no sólo el prostituir a un niño sino también el corromperlo. La corrupción es susceptible de interpretarse restrictivamente como un estadio previo a la prostitución en el que se pretende instalar para luego inducirle a ésta, incluso aceptando una interpretación más amplia pero respetuosa del bien jurídico de la libertad sexual, condiciona el comportamiento sexual del niño no sólo ahora, sino en su vida adulta, al dificultarse sensiblemente su libre elección futura. Sin embargo lo cierto es que por corrupción se debe entender el fomentar en el niño comportamientos o actitudes sexuales que se alejan de las pautas sociales mayoritarias, dicho de otro modo, de la moral sexual colectiva, sin atender a si ello supone un atentado a la libertad o no, lo que desenfoca totalmente el problema (cfr. Diez Ripollés, José Luis; *La protección de la libertad sexual, insuficiencias actuales y propuestas de reforma*, página 173 y subsiguientes, Bosch Casa Editorial S. A.).

El niño no posee aún capacidad de decisión en el ámbito sexual, o no la posee hasta cierta edad, por ello es menester configurar tipos que tengan en cuenta los diversos grados en que esa capacidad resulta afectada. Pensamos, por ello, que ese es el modo adecuado para resolver la mayor parte de los supuestos llamados de corrupción.

#### Rufianismo

Resulta importante dejar en claro que el rufián actúa en contra de la voluntad de la víctima, o en todo caso prevaleciendo de su superioridad; ello ha dado pie a que cualquier mediación en el tráfico de prostitución, aun dentro de una relación comercial normal, haya sido considerada explotación, en la jurisprudencia compa-

rada (principalmente la española), siendo irrelevante el consentimiento de la víctima.

La supresión del tipo de rufianismo deja fuera del derecho penal sexual, cuando menos, aquellas conductas del rufianismo que inciden sobre una persona prostituida que desea ejercer la prostitución o mantenerse en ella pero sin verse obligada a aceptar especiales relaciones de dependencia. Por otra parte, en aquellos casos en que la persona, además, no desea ejercer o mantenerse en la prostitución, si adicionalmente se ve obligada a mantener unas indebidas relaciones de dependencia personal o económica, el contenido de lo injusto es obviamente superior. En ambos casos el contenido de lo injusto al que aludimos se inserta plenamente en el ámbito de la protección a la libertad sexual, del que no debemos separarnos.

Decir que estas conductas son excluidas en los restantes tipos de prostitución o en tipos ajenos al derecho penal sexual ignora la específica lesión a la libertad sexual.

#### Consideraciones finales

No obstante la sanción del presente proyecto de ley, corresponde efectuar, para evitar inconvenientes a futuro, algunas recomendaciones:

1. A los señores procuradores fiscales, poner especial consideración hacia la víctima del delito, recordándoles que a ellas el Estado les expropió el conflicto y por tanto como representantes del Ministerio Público, son ellos quienes estarían investidos para defender sus derechos.

2. A las Legislaturas provinciales, la sanción de códigos de forma que contemplen los lineamientos de un proceso penal acusatorio, contradictorio y continuo, respetándose a ultranza el principio de celeridad procesal.

Hasta que ello no ocurra se recomienda la procedencia de la prisión preventiva solamente en aquellos casos en que cumpla una función de medida cautelar, es decir cuando efectivamente la libertad del procesado pueda obstruir los fines del proceso.

Si tomamos en cuenta la denominada "ley del 2 x 1", una vez dictada la sentencia pueden darse dos supuestos:

a) El procesado resultó inocente y cumplió prisión preventiva, entonces se cometió una injusticia y el Estado tendrá que indemnizarlo;

b) El procesado resultó culpable y cumplió prisión preventiva, entonces se debe aplicar la ley y, por tanto, estará preso la mitad del tiempo de la condena.

Es menester recordar que la ley a la que hacemos referencia fue sancionada para cumplir con el pacto de San José de Costa Rica, al cual el Estado argentino está obligado.

Es cierto que debido al auge de la "justicia mediática" la idea de que un procesado viva el juicio en libertad trae aparejada una situación de conmoción social que contribuye a aumentar el descreimiento en la justicia, pero ello es debido al carácter estigmatizante del sistema penal que desde el momento de la detención etiqueta a

las personas como "delincuentes". Se trata de un problema de índole político-criminal que afecta al sistema penal en su conjunto y que es contraproducente porque la función punitiva que en la práctica cumple el encarcelamiento preventivo o la mera detención está internalizada en el conjunto de la sociedad.

De esta manera, en el supuesto de que se compruebe la inocencia del procesado y éste vivió el juicio en libertad, esa sensación de injusticia disminuirá notablemente que si se comprueba su inocencia con prisión preventiva firme.

El derecho a la libertad en el proceso penal es, además, un imperativo constitucional ahora reforzado por las normas de derecho internacional donde los "Estados miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y, de esta manera, reducir la aplicación de las penas de prisión para racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos". (Reglas de Tokio, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre de 1990.)

Por último, agradezco a las doctoras Graciela Ledesma y María Virginia Tedeschi, la elaboración del presente proyecto de ley.

Graciela Fernández Meijide. — Federico T. M. Storani. — Rodolfo Rodil. — Carlos A. Alvarez. — Carlos A. Raimundi. — Irma F. Parentella. — Nilda C. Garré.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

51

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º—Agréase al artículo 644 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, el párrafo siguiente:

A pedido de parte o de oficio, el juez podrá ordenar en la sentencia aquellas medidas que tiendan a asegurar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la misma, sean cuotas atrasadas o futuras cuando el obligado no diese garantías suficientes de su cumplimiento.

Art. 2º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Meijide. — Federico T. M. Storani. — Rodolfo Rodil. — Carlos A. Alvarez. — Carlos A. Raimundi. — Irma F. Parentella. — Nilda C. Garré. — Guillermo E. Estévez Boero. — Dante M. A. Caputo. — Elia M. Carrío.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Presentamos a consideración de la Honorable Cámara un proyecto de modificación del artículo 644 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.

Este proyecto tiene como antecedente un proyecto de autoría de Juan Pablo Cañero.

Es por todos conocido que el deber de prestar alimentos, tal como aparece regulado carece de toda efectividad, y no se compadece con los imperativos asistenciales de la institución, ya que no tienen en cuenta la celeridad, ni la efectiva necesidad del solicitante, quien se ve las más de las veces perjudicado por los innumerables obstáculos procesales que impiden el cumplimiento de la obligación alimentaria, así como la falta de medidas tendientes a asegurar dicho cumplimiento, lo que deriva en una verdadera privación de justicia.

Un juicio por fijación de cuota alimentaria que tarda tres años promedio no implica administrar justicia. Tal el estado actual de las cosas que deseamos revertir, teniendo en cuenta que la reforma normativa no es suficiente solución si no es acompañada de un replanteamiento general del funcionamiento jurisdiccional.

El reclamo judicial por alimentos hace, como es de conocimiento de la mayoría de los operadores de derecho, legisladores y comunidad toda, transitar a quien lo realiza un arduo camino a fin de llegar a una sentencia que transforme su petición en un derecho exigible. El arribar al fallo no significa la culminación del camino iniciado. Efectivamente, luego del dictado de la sentencia la mayoría de los juicios iniciados por fijación de cuotas alimentarias se convierten al poco tiempo en demandas por ejecución ante el incumplimiento del obligado.

Esta situación transforma en abstracto el derecho consolidado por la sentencia, y debilita la relación del progenitor con sus hijos —ya que el cumplimiento de la cuota alimentaria, en general abonando por el padre que no tiene la tenencia de los menores, implica además presencia paterna—, y la relación entre ambos progenitores, deteriorando la imagen de los padres frente a los hijos.

En nuestra legislación no se prevé la creación de un fondo compensatorio a los fines de suplir el incumplimiento, subrogándose el Estado frente al deudor de la obligación, tal como sucede en Francia, por ejemplo.

Porque resulta impensable hoy en nuestro país dicha solución, y por todo lo vertido anteriormente consideramos necesario implementar un sistema de garantías que preserve la percepción de alimentos. Garantías hipotecarias, hipotecas especiales, avales bancarios, etcétera; tal como sucede en la legislación comparada, o bien establecer el pago directo de la cuota por el empleador al beneficiario de parte del sueldo del obligado, sin demoras ni entorpecimientos.

Creemos que el juez deberá fijar alimentos provisorios y en un plazo breve una vez iniciado el juicio de alimentos, teniendo en cuenta para la fijación del quantum las pruebas aportadas por la actora, aún la testimonial sumaria, acorde con los artículos 440 y siguientes del CPCC, adecuados al nivel de vida del que gozó el núcleo familiar durante la convivencia.

A estas soluciones (parciales, ya que todas estas medidas deben ir acompañadas de una campaña concien-